



ENTREVISTA

Principios y técnicas del nuevo Derecho Canónico

Contesta PEDRO LOMBARDIA

Uno de los canonistas que más se han distinguido estos últimos años por sus escritos en pro de la renovación del Derecho Canónico es, sin duda, Pedro Lombardía. Al mismo tiempo ha sido el hombre cuya dedicación, talento y capacidad de arrastre han hecho posibles empresas científicas como el Instituto «Martín de Azpilcueta» y la revista «Ius Canonicum», a las que ha sabido dar una proyección internacional y de los cuales ha sido, hasta hace pocos meses, su primer Director. Por lo que atañe a la revista, él fue su infatigable impulsor en las etapas de

su comienzo y de su consolidación, siempre las más trabajosas de cualquier empresa o institución, y a él se debe también la preparación de los primeros trabajos que han conducido a las modificaciones que con este número se inauguran. No podía faltar su autorizada opinión en estas páginas dedicadas a las posibilidades de un nuevo Derecho Canónico.

IUS CANONICUM : ¿Entiende Vd. que los documentos conciliares implican unos nuevos principios fundamentales del orden jurídico de la Iglesia? En caso afirmativo, ¿cuáles son esos principios?

P. LOMBARDIA : Estoy persuadido de que los documentos del Concilio Vaticano II han abierto al Derecho Canónico perspectivas insospechadas hasta hace aún muy pocos años y llevan en sí el germen de una profunda renovación. Se me pregunta acerca de principios fundamentales. Prescindo, por tanto, de las medidas concretas adoptadas por el aún reciente Concilio Ecuménico: reformas disciplinarias, instauración de nuevos órganos de gobierno unipersonales o pluripersonales, directrices para la acción pastoral o para el ecumenismo que implican innovaciones de índole jurídica, etc. También se indica en la pregunta de manera bien concreta que debo referirme a principios «del orden jurídico de la Iglesia». Es lógico, por tanto, que no aluda a las cuestiones acerca de la justicia en las relaciones sociales propias del orden temporal o del diálogo Iglesia-Mundo. Quedará, pues, al margen de mi respuesta el rico contenido de la Constitución «Gaudium et spes» y de la Declaración «Dignitatis humanae».

Aún ciñéndome a los que pueden considerarse principios fundamentales del orden jurídico de la Iglesia en el más estricto de los sentidos, la materia que el Vaticano II ofrece a nuestra consideración es muy amplia.

Lo más importante es, sin duda, que la Iglesia ha profundizado durante el Concilio en el designio divino acerca de su estructura y de su misión; en definitiva se ha esforzado en penetrar en su propio Misterio. Este enriquecimiento de la Iglesia en relación con lo que tradicionalmente se ha venido denominando la Voluntad fundacional de Cristo, mejor conocida por la comunidad de los creyentes gracias a las luces del Magisterio conciliar, tiene un extraordinario interés, puesto que da ocasión a plantear con más rigor el tema del Derecho divino.

Hervada ha puesto recientemente de relieve que el designio de Dios acerca de su Iglesia sólo puede ser considerado Derecho en la medida en que tiene una vigencia histórica; es decir, cuando ha sido «positivizado». Advierte, sin embargo, que por positivación «hay que entender, no



Vaticano II y Derecho Canónico

su radical recepción dentro del ordenamiento canónico por un acto de autoridad humana, ni su transformación en Derecho, sino su paso a la vigencia histórica por la toma de conciencia eclesial de su contenido concreto» (J. Hervada-P. Lombardía, **El Derecho del Pueblo de Dios**, I, Pamplona 1970, pág. 53). En este sentido es evidente que el Vaticano II ha positivizado principios del orden jurídico eclesial cuyo carácter fundamental es incuestionable. Sin ánimo de ser exhaustivo ensayaré una enumeración de principios que desde este punto de vista tienen particular importancia:

La consideración de la dignidad y libertad de los hijos de Dios como «conditio» —es decir, como criterio fundamental de convivencia— del Pueblo mesiánico o sacerdotal (**Lumen gentium**, 9), lo que implica colocar en el primer plano del Derecho Constitucional el tema de los derechos fundamentales del fiel (Vid. A. Del Portillo, **Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos**, Pamplona 1969; P. Viladrich, **Teoría de los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos**, Pamplona 1969).

La igualdad fundamental de todos los fieles concebida como principio previo a cualquier distinción funcional (**Lumen gentium**, 32). Esta igualdad «quoad dignitatem et actionem cunctis fidelibus communem circa aedificationem Corporis Christi» supone la responsabilidad de toda la Iglesia —de todos y cada uno de los fieles— en la promoción del orden social justo del Pueblo de Dios, lo cual lleva consigo a mi juicio la imposibilidad de entender el ordenamiento canónico exclusivamente desde el punto de vista de los actos de imperio de quienes participan del poder pastoral. Ello obliga a someter a revisión la teoría de las fuentes del Derecho.

En estrecha relación con el tema antes apuntado está la doctrina conciliar sobre los carismas personales. Me he ocupado de ella en otra ocasión (**IUS CANONICUM**, 9, 1969, págs. 101-119; «Il diritto ecclesiastico», 80-I, 1969, págs. 3-21). Baste recordar aquí que si «ex horum charismatum, etiam simpliciorum, acceptione, pro unoquoque credentium ius et officium oritur eadem in bonum hominum et aedificationem Ecclesiae exercendi...». (**Apostolicam actuositatem**, 3), el Derecho Canónico debe tutelar vigorosamente la iniciativa privada y no sólo los impulsos a la acción pastoral que proceden de la organización eclesiástica. Temas clásicos de la Teoría general —derechos subjetivos, distinción entre Derecho público y Derecho privado, etc.— deben ser replanteados desde esta perspectiva.

El Concilio ha llamado la atención en varias ocasiones acerca del sentido de servicio con que han de concebirse las funciones de los sagra-

dos pastores y, en general, de los ministros sagrados (Vid. especialmente **Lumen gentium**, 24, 27 y 32), lo que, además de constituir una llamada de atención en cuanto al estilo, en el ejercicio del poder, lleva consigo la exigencia de innovaciones jurídicas, especialmente en el modo de concebir la organización eclesial.

La importancia de la doctrina acerca de la colegialidad del episcopado no necesita ser subrayada. Es indudable que está llamada a tener una profunda influencia en el futuro Derecho Canónico; en este punto —como en tantos otros de esa importante fuente del Derecho Constitucional de la Iglesia que es la Const. **Lumen gentium**— hay que tener en cuenta para la tarea científica que no se pueden trasvasar sin más al campo jurídico enunciados de naturaleza teológica. La advertencia es importante para evitar equívocos e imprecisiones. Hervada ha demostrado cómo se puede proceder al respecto, sin perder por ello sentido de la vitalidad eclesial ni restar audacia a las conclusiones (Vid. su planteamiento del Derecho Constitucional en **El Derecho del Pueblo de Dios**, cit., capítulos IV-VIII).

La superación de la concepción territorial de las circunscripciones eclesiales, con la consiguiente visión de la Iglesia particular como «Populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda conceditur» (**Christus Dominus**, 11) ha de llevar a una organización más dinámica de las estructuras relacionadas con la acción pastoral (Vid., entre otros autores: J. A. Souto, **Estructura jurídica de la Iglesia particular: presupuestos**, en *IUS CANONICUM*, 8, 1968, págs. 121-202; A. Del Portillo, **Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras pastorales**, *ibid.*, 9, 1969, págs. 305-329).

El Vaticano II ha fijado unas importantes directrices acerca del ecumenismo que implican también consecuencias de orden jurídico: la consideración canónica de la autonomía de las Iglesias y comunidades eclesiales separadas; la relevancia canónica de algunas de sus normas; la posición del cristiano separado como miembro de su propia Iglesia o comunidad eclesial, no como un súbdito de la Iglesia en situación anómala, etc. (Vid.: P. Gismondi, **Iglesias y comunidades eclesiales acatólicas en los recientes decretos conciliares**, en *IUS CANONICUM* 5, 1965, págs. 385-400; J. Arias, **Bases doctrinales para una nueva configuración jurídica de los cristianos separados**, *ibid.*, 8, 1968, págs. 29-120, con abundante información bibliográfica).

Finalmente, para no hacer demasiado extensa esta enumeración que, aun con los límites que antes señalé, sólo puede ser ejemplificativa, habría que aludir a las consecuencias que en el orden estrictamente canónico tienen las doctrinas conciliares sobre el diálogo Iglesia-Mundo y, en general, con respecto al orden temporal.

Así por ejemplo la libertad de los laicos en su actuación política y social implica en el ámbito canónico un derecho de inmunidad frente a eventuales ingerencias de las autoridades eclesiásticas (me ocupé de la cuestión en *IUS CANONICUM*, 6, 1966, págs. 348- 352).

Igualmente, cuando el Concilio considera justas las aspiraciones de los que reclaman «iuridicam delimitationem potestatis publicae, ne fines honestae libertatis et personae et associationum nimis circumscribatur» (**Dignitatis humanae**, 1) o recuerda que «ut civium cooperatio, cum officii conscientia coniuncta, in cotidiana publicae rei vita effectum suum felicem attingat, requiritur positivus ordo iuris, in quo conveniens divisio munerum et institutorum auctoritatis publicae atque simul efficax tutio iurium, neminique obnoxia, instaurentur» (**Gaudium et spes**, 75), aunque se está refiriendo directamente a la sociedad civil, pone indirectamente de relieve pero inequívocamente la necesidad de que la Iglesia adopte fórmulas jurídicas para su propia vida comunitaria que contribuyan eficazmente a ordenar la convivencia eclesial de modo coherente con estas enseñanzas.

Si la Iglesia es una sociedad jurídicamente organizada debe refrendar su doctrina sobre este tipo de cuestiones con un vigoroso testimonio. Las soluciones técnicas no pueden ser las mismas que las de los Estados, sino que han de adecuarse a la peculiar naturaleza de la comunidad eclesial; sin embargo, el inevitable «mutatis mutandis» con que es preciso matizar el planteamiento del problema no justificaría nunca la contradicción en que incurren hoy no pocos gobernantes eclesiásticos cuando hablan con gran calor del sentido cristiano de la tutela de los derechos humanos, al enjuiciar —como no puede menos de hacer la Iglesia— el orden temporal y, al mismo tiempo, escamotean mediante bellos discursos acerca de la primacía de lo pastoral sobre lo jurídico en el ámbito eclesial, el grave problema de la tutela de los derechos de los fieles frente a posibles abusos en el ejercicio del poder pastoral, o se evaden del cumplimiento de los importantes deberes que les competen, relativos a la promoción de la justicia, el orden y la paz en la vida comunitaria de la Iglesia. ¿Asistimos sólo a una crisis de obediencia o también a una crisis de autoridad?

Esta selección de cuestiones, que plantean interesantes problemas de relaciones entre Derecho divino y Derecho humano y en todo caso afectan a los principios fundamentales del orden jurídico de la Iglesia, deben ser objeto de una reflexión valiente y serena por parte de la ciencia canónica actual, para que se puedan elaborar soluciones técnicas que contribuyan a promover en la práctica el orden justo del Pueblo de Dios de manera congruente con el Magisterio del Vaticano II.

I C: ¿Cumple el canonista una misión eclesial? ¿Significa esto que tiene una función pública, que es un colaborador de la jerarquía?

P L: Para que los principios del Concilio Vaticano II acerca del orden social justo del Pueblo de Dios lleguen a ser verdaderamente eficaces, es necesario que sean desarrollados y concretados en la legislación, aplicados por los Tribunales, tenidos en cuenta en la actividad de la organización oficial de la Iglesia, etc. Para esto no basta con proclamarlos; es necesario traducirlos en soluciones técnicas. Por tanto, las circunstancias actuales de la vida de la Iglesia exigen de manera imperiosa que haya buenos canonistas.

Función eclesial del canonista

El canonista, si realiza bien su trabajo de técnico del orden social justo del Pueblo de Dios, cumple una importante función eclesial. Pese al escepticismo con que algunos pueden leer estas palabras, me parece evidente que la Iglesia necesita resolver institucionalmente las tensiones que se advierten hoy por todas partes y ello difícilmente puede hacerse sin juristas que contribuyan a encontrarle soluciones justas (Vid. J. M. Setien, **Tensiones en la Iglesia**, en «Concilium», n.º 48, septiembre-octubre 1969, págs. 226-239 de la ed. castellana).

Que esta función sea pública o no depende del trabajo que el canonista realice. Un profesor, o sencillamente un estudioso del Derecho Canónico, tendrá que adoptar una postura independiente, comprometida sólo con la verdad, y desde ella aportar soluciones y ejercer una crítica científica del desarrollo del fenómeno jurídico en la Iglesia. Un abogado tendrá que asesorar a sus clientes y colaborar con ellos, también frente a la organización oficial eclesiástica, cuando se plantean problemas en relación con ella, sin más límites que los de la ética profesional. Un juez —aún participando de la potestad de jurisdicción— deberá adoptar una postura independiente, sean quienes fueren las partes en litigio. Un técnico de la organización oficial —de un organismo administrativo, por ejemplo— deberá ser, lógicamente, un colaborador de quienes dirijan esa concreta actividad de gobierno; pero su colaboración deberá ser según Derecho.

I C: Apartándose de su orientación clásica, el Derecho de la Iglesia ha ido cargando progresivamente su centro de gravedad sobre la potestad de jurisdicción y sobre la figura de la ley, como centro de la sistemática científica y centro de la producción normativa, respectivamente. Este aspecto normativista del Derecho de la Iglesia provoca consecuencias de la máxima importancia; así, por ejemplo, el oscurecimiento de la jurisprudencia.

cia y de la doctrina. ¿En qué medida el cambio es posible y conveniente? ¿Cuál debe ser la función e influencia de la jurisprudencia?

P L : Me parece que la observación que sirve de base a su pregunta es exacta en sus líneas fundamentales, aunque requiera matizaciones que no son posibles en esta ocasión. ¿Es conveniente rectificar? No cabe la menor duda. ¿Posible? Sí, aunque no falten dificultades. Habrá que vencer muchas resistencias: la inercia de los que mandan, el talante anárquico y poco constructivo de muchas rebeldías, la limitada visión que se ha dado del Derecho en la formación intelectual de tantos eclesiásticos... A mí, sin embargo, me basta con saber que es posible para sentirme obligado a prestar una colaboración esperanzada. ¿No es acaso esta dificultad la que hace tan atractivo el trabajo a la minoría de canonistas que trata hoy de plantear con claridad los problemas del orden jurídico eclesial y de contribuir a resolverlos?

Para remediar el actual estado de cosas hay que atribuir a los Tribunales de justicia un papel mucho más importante del que actualmente desempeñan en la Iglesia. Para ello es imprescindible adoptar algunas medidas.

El papel de la jurisprudencia

Hay que considerar incompetentes a los órganos administrativos para dirimir cuestiones relativas a la tutela de los derechos subjetivos. Este tipo de cuestiones no son propias para ser ventiladas en expedientes disciplinarios como hoy ocurre con frecuencia. ¿Que el proceso canónico es lento y costoso? Mejórese la dotación de los tribunales, déseles un personal preparado y unos medios de trabajo que permitan mayor eficacia, concéntrase la función judicial en menos tribunales, pero con más sentido profesional y más capacitados para cumplir su función, réformese el Derecho procesal recurriéndose, para las materias en que ello es adecuado, a procesos sumarios más ágiles y rápidos; pero no se confunda un proceso, por muy sumario que sea, con un expediente administrativo.

Por otra parte, la función judicial necesita una estabilidad mayor, y que le sea reconocida la dignidad que le corresponde, garantizándose más la independencia de los jueces. La supresión de los tribunales a nivel diocesano, atribuyendo la función judicial a un número más reducido de tribunales bien dotados, ayudaría a conseguir estos objetivos.

Con estas dos medidas el panorama del Derecho Canónico cambiaría de signo. Unos jueces independientes ayudarían a borrar la falsa impresión de que el Derecho en la Iglesia no es criterio ordenador de la actividad de gobernantes y gobernados, sino instrumento de aquéllos para controlar y recortar la iniciativa de éstos; es decir, una especie de barrera que perjudica de hecho la aplicación del principio de corresponsabilidad. Por otra parte, si los tribunales fueran competentes para entender de todas

las cuestiones propias de la función judicial dejaría de ser un problema la inevitable lentitud de la reforma legislativa, actualmente en curso, puesto que sería la propia Jurisprudencia la que contribuyera a reformar el Derecho Canónico, al formalizar en sus sentencias los principios conciliares, utilizando los cauces que le proporciona el c. 20 para colmar las lagunas originadas por la actual falta de vigencia de aquella parte del Código y de la legislación complementaria que está en contradicción con los documentos del Vaticano II.

I C: ¿Y cuál debe ser la función e influencia de la doctrina?

P L: La doctrina canónica tiene una importante función. Debe proporcionar al legislador criterios técnicos para la reforma del Derecho escrito. Por otra parte, una crítica bien fundada de la legislación puede ejercer una influencia decisiva en la vida jurídica de la comunidad eclesial, en la medida en que contribuya a formar las soluciones judiciales. En este sentido, la ciencia canónica debe estimular una interpretación progresiva de la ley, que permita aplicarla de manera realista a la solución justa de los problemas actuales. La doctrina debe ir detectando también los supuestos en los que la ley escrita ha dejado de tener valor, por estar descalificada —la expresión es de Journet— por instancias canónicas superiores; en definitiva, por los principios fundamentales del orden social del Pueblo de Dios. A su vez, las lagunas resultantes de esa necesaria labor de poda no pueden atenderse solamente mediante una remisión a los principios fundamentales; hacen falta soluciones técnicas concretas en cuya elaboración el papel de la doctrina puede ser decisivo.

Influencia de la doctrina canónica

Consideraciones análogas pueden hacerse en el campo de la organización eclesiástica. Una doctrina científica sería puede orientar las deseadas mejoras en este campo, en el que hoy las improvisaciones son por desgracia demasiado frecuentes. Lo mismo cabe decir en lo que se refiere al régimen jurídico de la actividad de la organización.

Creo que lo dicho hasta ahora pone claramente de relieve, no sólo que en el momento actual hacen falta canonistas; sino, además, que los canonistas mediocres serían de poca utilidad. De aquí la importancia de cuantas iniciativas ayuden al fomento de la investigación canónica y a vigorizar los centros en los que se forman los futuros canonistas. Es triste que, en unos momentos en los que la Iglesia necesita tanto de hombres dispuestos a desempeñar la función de técnicos del orden social justo del Pueblo de Dios, no se oigan más voces de aliento para los estudiosos del Derecho Canónico, ni más iniciativas concretas que estimulen la enseñanza y la investigación.

I C: ¿Qué consecuencias ve Vd. en que el sistema canónico se funde en la interpretación auténtica? ¿Qué soluciones propone?

P L: Supongo que la pregunta alude a la curiosa situación creada desde la promulgación del Código de 1917. Como ya hemos tenido ocasión de comentar, a la jurisprudencia se atribuyó un papel secundario en el conjunto del sistema. Por otra parte se reconoció a los Dicasterios de la Curia Romana un poder reglamentario consistente en la competencia para dictar instrucciones para la aplicación de los cánones del Código. Finalmente, se constituyó una Comisión de Cardenales —felizmente suprimida por Juan XXIII— con competencia para interpretar auténticamente el Código, mediante respuestas a las dudas que le fueran propuestas.

Este sistema no ha dado resultados positivos. Los Dicasterios de la Curia no sólo monopolizaron en la práctica la iniciativa en la génesis de las normas legales, sino que además podían innovar la legislación, bien recabando la aprobación del Romano Pontífice para sus instrucciones y decretos cuando su contenido traspasaba los naturales límites de la potestad reglamentaria, bien, sencillamente, traspasándolos de hecho, puesto que no estaba prevista la revisión judicial de la actividad administrativa, contra la que no cabía más recurso que el de acudir directamente al Romano Pontífice. Consecuencia de todo ello es que la Curia Romana, en vez de quedar limitada en su actividad por las leyes, controla en buena parte la eficacia de la legislación.

El futuro de la interpretación auténtica

En cuanto a la interpretación auténtica, la Comisión cardenalicia competente emanó, como es sabido, numerosas respuestas, que contribuyeron en parte a suplir el vacío que dejaba la falta de jurisprudencia. Pero el remedio sólo podía ser parcial. En primer lugar porque la Comisión cardenalicia no podía ser interpelada por cualquier fiel, sino solamente por determinados dignatarios eclesiásticos; de aquí que este órgano no pudiera tutelar a los fieles frente al desconocimiento de sus derechos que pudiera derivarse de una interpretación unilateral de la ley por parte de los órganos administrativos. Además, la actividad de la Comisión de intérpretes complicaba mucho el sistema de fuentes de producción del Derecho y oscurecía notablemente la jerarquía de normas, puesto que le era posible, a tenor del c. 17, dar una interpretación modificadora del alcance de la ley, si bien en este caso tenía que atenerse a los requisitos de la irretroactividad y de la promulgación.

Considero que este sistema debe revisarse profundamente. ¿Soluciones? Una más rigurosa formalización de los actos legislativos y una más nítida jerarquía de normas. Un sometimiento a la ley de la administración eclesiástica, tanto en lo relativo a los actos administrativos como en el ejercicio de la potestad reglamentaria. La atribución exclusiva a los tri-

bunales de justicia de la competencia para dirimir las controversias relativas a los derechos de las personas. El establecimiento de un amplio control judicial de la actividad administrativa.

Si se adoptan estas soluciones, la interpretación auténtica, tal como se ha venido entendiendo, dejaría de tener sentido, puesto que la función de interpretar las leyes sería desempeñada por la jurisprudencia y por la doctrina. Evidentemente, ello no excluiría la posibilidad de leyes destinadas a interpretar la legislación anterior; pero se trataría de un fenómeno excepcional, en manera alguna perturbador, si esta competencia se atribuye a los normales órganos legislativos, ateniéndose a los mismos requisitos formales que los que se establezcan para las demás leyes.

I C : Vd. ha abogado por una formalización de los actos legislativos y ha aludido a la jerarquía de normas. Bien, pero ¿cuáles podrían ser los diversos tipos de normas y cuál el valor de cada uno de ellos?

P L : Para lograr la necesaria seguridad jurídica, me parece imprescindible distinguir tres planos en las normas legales canónicas:

Jerarquía de normas

a) Las normas fundamentales, promulgadas con especiales solemnidades, que sólo podrían ser modificadas por normas de rango constitucional; es decir, por actos del Romano Pontífice en los que constara explícitamente la voluntad de modificar la legislación de la Iglesia a nivel fundamental. En la legislación fundamental deberían regularse expresamente los requisitos formales a los que quedara condicionada la vigencia de las leyes de rango inferior y los criterios en que habría de basarse la eficacia normativa de la costumbre canónica.

b) Las leyes ordinarias, dictadas por las autoridades eclesiásticas competentes según su ámbito de aplicación, que habrían de contar con el asesoramiento de adecuados órganos consultivos, siempre distintos de los encargados de la actividad administrativa. Las leyes ordinarias —sin perjuicio de los problemas de jerarquía entre disposiciones a diversos niveles; por ejemplo, sometimiento de la actividad legislativa diocesana a las leyes ordinarias de rango superior— dictadas a cualquier nivel, podrían ser anuladas por un órgano independiente, a quien se confiara esta específica competencia, en caso de infracción de las normas fundamentales.

c) Las disposiciones administrativas, es decir, las instrucciones, decretos generales, etc., dictados por los órganos administrativos en el ámbito de su competencia, para desarrollar las normas legales (actividad reglamentaria). Estas normas deberían ser dictadas por los órganos adminis-

trativos bajo su exclusiva responsabilidad; es decir, sin que fuese posible un refrendo o aprobación por parte de autoridades superiores. Estas disposiciones podrían ser impugnadas, en caso de infracción de ley, mediante el sistema de recursos que se establezca para solicitar la revisión de los actos administrativos.

Como ve, mi postura incluye —entre otras cosas— una actitud favorable acerca de la necesidad de una legislación canónica a nivel fundamental. Sin entrar en otros detalles, a los que ya tuve ocasión de referirme (en *IUS CANONICUM*, 8, 1968, págs. 325-347), ni mediar en la actual polémica acerca del proyecto de Ley fundamental de la Iglesia, quisiera señalar que sí en el proyecto en cuestión no se incluyen unas normas claras acerca de su alcance y relaciones con el resto de la legislación eclesiástica y sobre la jerarquía de normas en el ordenamiento jurídico de la Iglesia, pocos frutos cabría esperar de él.

I C : Perdone que insistamos sobre un punto, pero nos parece de interés. No se trata sólo de garantizar la recta aplicación e interpretación del Derecho positivo, sino también de garantizar tanto los derechos de los fieles, como el recto y adecuado desenvolvimiento de la acción de gobierno. ¿Qué interés ve, desde este punto de vista, a un control judicial de los actos de la potestad administrativa? ¿Cree Vd. que es útil al respecto el recurso contencioso-administrativo? ¿Entiende que es suficiente el recurso de este género tal como lo ha introducido recientemente el reglamento de la Signatura Apostólica?

P L : Me parece que la respuesta se deduce de lo dicho hasta ahora. Coincido, sin embargo, en que el tema es importante y, por tanto, es conveniente insistir.

El control judicial de la actividad administrativa me parece imprescindible para que pueda hablarse con rigor de derechos de los fieles. Es inútil, en efecto, proclamar unos derechos, si no se arbitran unos concretos instrumentos técnicos para su tutela en el orden jurídico.

He aquí un punto en el que confluyen las exigencias de dos importantes directrices conciliares, cuya aplicación ha de conjugarse armónicamente. Por una parte el Concilio —basta leer detenidamente el decreto **Christus Dominus** para darse cuenta de ello— desea una coordinación de los recursos de la organización eclesiástica, al servicio de una acción pastoral eficaz; por otra, se afirma la existencia de unos derechos fundamentales de los fieles y de un derecho y deber a ejercer los carismas personales. Es necesario, por tanto, conjugar la eficacia de la actividad de la organi-

Control jurisdiccional

zación oficial de la Iglesia con una tutela de la libertad que deje campo libre a la iniciativa privada de los fieles.

El tema es de gran interés, puesto que en definitiva se trata del establecimiento de un sistema jurídico que parta de un importante dato eclesiológico: el Espíritu Santo «*Ecclesiam... diversis donis hierarchicis et charismaticis instruit ac dirigit, et fructibus suis adornat*» (*Lumen gentium*, n. 4). En efecto, si el ordenamiento canónico es la estructura jurídica de la Iglesia, ha de contar con los medios técnicos necesarios para que la acción del Espíritu pueda operar sin obstáculos, tanto por vía jerárquica, como a través de los carismas personales. En definitiva ello obliga a tutelar, delimitar y armonizar tanto la actividad de la organización oficial como la acción libre, privada, de los fieles. Ambas acciones se han manifestado siempre, de una manera u otra, a lo largo de la historia de la Iglesia. Por otra parte, los criterios concretos relativos al orden social de la Iglesia que han tratado de resolver la cuestión han evolucionado en las diversas etapas de la peregrinación del Pueblo de Dios, mediante la aplicación de los logros de la cultura humana de los diversos períodos históricos.

Concretamente en nuestro tiempo, la técnica jurídica, como ha puesto de relieve recientemente Maldonado (*La significación histórica del Derecho Canónico*, en *IUS CANONICUM*, 9, 1969, págs. 5-99), puede prestar importantes servicios en lo que atañe al orden social justo del Pueblo de Dios, entre los que el tema del control judicial de la actividad administrativa tiene notable interés. Evidentemente, no se trata de afirmar que el recurso contencioso administrativo sea una panacea que resuelva todos los problemas jurídico-canónicos relativos a la armonización de la actividad de la organización oficial de la Iglesia y la de la iniciativa privada, pero sí que se trata de una óptima solución, en realidad la única que conoce la actual técnica jurídica, para enfocar adecuadamente un aspecto importante del problema.

Por ello, como jurista, no puedo menos de considerar positivo el hecho de que en la reciente reforma de la Curia Romana se haya introducido el principio de la revisión judicial de los actos administrativos, al atribuirse al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica la competencia de entender de los recursos contra los actos administrativos de las Congregaciones. Se trata de un paso adelante de indudable importancia, puesto que la sola admisión del principio supone un progreso con respecto a la solución anterior. Por supuesto, la concreta regulación dada al recurso en el reglamento de la Signatura está necesitada de mejoras. No parece posible hacer aquí un juicio detallado de esa regulación; por otra parte, Souto ya hizo en las páginas de esta revista un excelente comentario del reglamento (9, 1969, págs. 521-537).

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este problema no se puede resolver admitiendo solamente un recurso judicial contra los actos administrativos de las Congregaciones romanas, puesto que en ese caso, para agotar la vía administrativa de suerte que sea posible el recurso contencioso administrativo ante un Tribunal, habría que acudir a Roma para todo tipo de cuestiones, lo cual no puede considerarse lógico. Aparte las consideraciones que al respecto podrían hacerse en relación con el actual proceso de descentralización y desconcentración que se está operando en la Iglesia, no se puede pensar que los fieles recurran siempre en vía administrativa hasta las Congregaciones romanas, con las consiguientes dificultades de tiempo, de índole económica, de lejanía del órgano competente, etc. De seguirse este criterio, la tutela derivada de la revisión judicial de los actos administrativos sólo podría ser aplicable a muy contados casos, a cuestiones de excepcional importancia.

La solución lógica sería determinar algunas materias para las que la vía administrativa se agotara en Roma (pocas cuestiones de notable importancia). Para las restantes podría establecerse el principio de que la vía administrativa se agotara en la Conferencia episcopal, cuyos actos fueran a su vez recurribles ante un Tribunal con competencia en la región o nación, al que se atribuyera una función con respecto a los actos administrativos de la Conferencia, análoga a la que la Signatura cumple en relación con las Congregaciones romanas. Evidentemente esta solución implicaría dotar a las Conferencias episcopales de una Curia con órganos administrativos, cuya competencia y régimen jurídico de su actividad estuvieran bien delimitados.

- I C :** Con frecuencia se oye afirmar que no es posible —por ser contrario al designio fundacional de Cristo— trasladar las estructuras democráticas a la Iglesia. Aunque esto es cierto, ¿no puede suceder que, al amparo de esa verdad, se niegue la posibilidad de desplegar íntegramente —en el contexto de la Iglesia— las potencialidades organizativas implícitas en la dignidad y la libertad de las personas —en la libertad y dignidad del fiel (LG, 9)— so capa de que eso es transplantar estructuras democráticas? Una tal postura, ¿no estaría en contradicción con la voluntad fundacional de Cristo, esto es, con el mismo *ius divinum positivum*?
- P L :** El tema planteado tiene tantos matices que difícilmente puede ser tratado aquí con toda su amplitud, ni siquiera limitándonos a sus líneas fundamentales. En primer lugar habría que preguntarse sobre el significado de la expresión «estructuras democráticas» y no sería fácil llegar a una respuesta concreta.

¿Democracia en la Iglesia?

En todo caso me parece necesario subrayar que si bien la Iglesia no es una democracia —baste pensar en el problema del origen del poder para convenir en ello—, sí es cierto —así lo ha afirmado el Concilio— que la dignidad y libertad de los hijos de Dios es la **conditio** (es decir, el principio fundamental de convivencia) de su vida comunitaria. El Concilio, por otra parte, ha hecho esta afirmación en el contexto de una reflexión sobre el designio de Dios acerca de su Iglesia a la luz de la Escritura; ha positivizado, por tanto, un principio de Derecho divino. Es necesario que en su concreto ordenamiento jurídico se adopten medidas concretas para que esta fundamental afirmación no quede en bella retórica.

Los derechos de los fieles —como personas libres, elevadas a la dignidad derivada de la filiación divina— deben ser respetados. La Iglesia tiene el deber de llevar a cabo en nuestros días una valiente opción histórica, para asumir aquellos instrumentos técnicos de la cultura jurídica de nuestro tiempo que han resultado aptos para tutelar la dignidad y libertad de las personas. Esta responsabilidad nos compete a todos. Concretamente, los cultivadores del Derecho Canónico tenemos el deber de estudiar serenamente las cuestiones y proponer soluciones. Sin embargo —dada la actual situación de la Iglesia— esta gravísima responsabilidad pesa de manera particularmente directa sobre el Papa y los Obispos, sobre el entero Colegio Episcopal. Es necesario que los Sagrados Pastores vivan ilusionadamente este «grande período legislativo» de que habló una vez Pablo VI, aludiendo al concreto problema de la revisión del Derecho Canónico, sin impresionarse demasiado por lo que se ha dado en llamar antijuridicismo.

No cabe duda de que el poder pastoral debe ejercerse con sentido del diálogo, paternalmente, en una palabra. Pero ello no va reñido con el cumplimiento de dos graves deberes: custodiar el depósito, como pidió Pablo a Timoteo (I Tim. 1, 19 y 6, 12-14) y sentar las bases de un orden jurídico en la comunidad eclesial, en el que de verdad queden tuteladas la dignidad y libertad de los fieles. La función pastoral debe ejercerse paternalmente, pero ni puede desfallecer en la fortaleza necesaria para guardar el depósito, ni degenerar en un paternalismo que eluda una razonable institucionalización.